

La rehabilitación del alojamiento para las personas desplazadas en Ucrania

Laura A Dean

En Ucrania se están rehabilitando edificios para ofrecer alojamiento a las personas que huyen del conflicto en el país pero, a medida que la guerra continúe, se deberá reconocer la necesidad de soluciones más permanentes.

La guerra en Ucrania ha dejado a 1,6 millones de personas desplazadas dentro del país y a 1,4 millones desarraigadas que han huido a los países vecinos desde que empezó el conflicto en 2014¹. Este desplazamiento empezó poco a poco para luego explotar. Su primera oleada desde Crimea se inició en marzo de 2014; la segunda, procedente de Donbass, se originó en abril de 2014 y la cifra ha ido en aumento desde entonces.

Los desplazados internos en Ucrania se encuentran dispersos por todo el país aunque se concentran en sus cinco regiones orientales. Aunque el área geográfica es amplia, la ratio de personas desplazadas con respecto a la población autóctona en las regiones colindantes con la zona en conflicto es apenas de entre 51 y 120 desplazados internos por cada 1000 personas y en las regiones occidentales de Ucrania es de menos de cinco desplazados por cada 1000 personas². Según una ONG, solo el 7 % de los desplazados internos vive en centros colectivos financiados por el Estado, mientras que el 33 % lo hace con parientes y amigos, y el 60 % alquila viviendas y asume el coste del alquiler³.

Los centros colectivos consisten en distintos tipos de edificios —proporcionados por las autoridades regionales y municipales, ciudadanos particulares, colectivos religiosos y ONG locales— que han sido rehabilitados para atender las necesidades de las poblaciones desplazadas. Debido al clima invernal extremadamente frío, la provisión de alojamientos adecuados requirió de materiales de construcción para los tejados y las ventanas, y de mantas y lonas para cubrir las ventanas o los suelos desnudos. La rehabilitación de viejas instalaciones no es un concepto nuevo y ha prevalecido desde la caída del comunismo en Ucrania. El descenso de la tasa de natalidad y la caída de la economía planificada después de 1991 dejó muchas estructuras abandonadas en el período postsoviético. Las fábricas se han convertido en centros comerciales y los antiguos hospitales, en edificios universitarios. Cuando el conflicto estalló en 2014, el Gobierno volvió a utilizar la estrategia de rehabilitar

estructuras para poder alojar a la población desplazada, de forma que se alojó a los desplazados internos en campamentos de verano vacíos, viejas guarderías, sanatorios y residencias de estudiantes de todo el país.

Por ejemplo, los principales edificios de la antigua residencia de Víktor Yanukóvich, el presidente ucraniano derrocado, son actualmente un museo pero las antiguas residencias de sus guardaespaldas y miembros del servicio doméstico se han convertido en alojamientos para los desplazados internos. La Iglesia ortodoxa ucraniana ha ofrecido parte de sus monasterios para que sean rehabilitados como viviendas para los desplazados internos, y algunos ciudadanos particulares también han ofrecido de forma voluntaria sus inmuebles para que sean rehabilitados. Un hombre de negocios de la capital, Kiev, ofreció un viejo almacén que se reconvirtió en apartamentos para alojar a los desplazados internos. Se han transformados viejos almacenes en espacios aceptables para vivir. Los campamentos de verano del Mar Negro también se han rehabilitado y convertido en viviendas para los desplazados internos, aunque muchas de estas instalaciones no están equipadas para que se puedan realizar en ellas estancias a largo plazo durante los meses de invierno.

Estos centros colectivos pueden albergar entre 20 y 200 personas y muchos están saturados. Una persona lo comparó con vivir en un albergue con instalaciones comunitarias. Aunque se trata de estructuras permanentes, siguen siendo soluciones provisionales a la situación del alojamiento. Algunas personas se quedan unos pocos meses y otras se van mudando de un lugar a otro en busca de trabajo pero hay quienes se han llegado a quedar durante más de dos años, lo que pone de manifiesto que no disponían de una solución mejor. La escasez de viviendas y de perspectivas laborales ha mantenido a la gente en estos centros colectivos. Pero, al final, los particulares y las organizaciones acaban queriendo que les devuelvan sus inmuebles y algunos desplazados internos ya han sido

amenazados con el desahucio o se les ha empezado a cobrar un alquiler, dado que dichos propietarios no previeron que sus inmuebles fueran a ser utilizados durante tanto tiempo.

La constante guerra y los bombardeos diarios han sido un impedimento ya que cualquier reparación de viviendas que se inicie puede quedar deshecha de inmediato a medida que la línea del conflicto se mueve. Se han reparado más de 20 500 viviendas en Donbass desde octubre de 2014 y existe una base de datos de más de 21 000 direcciones en zonas controladas por el Gobierno en las que se ha planificado la realización de reparaciones, modernización estructural, calefacción y aislamiento durante 2017.

La legislación ucraniana obliga al Gobierno a proporcionar una vivienda a los desplazados internos pero la implementación de la ley pertinente ha sido problemática. Aunque se destinó un dinero a las administraciones locales para que procedieran al respaldo financiero del alojamiento provisional para los desplazados internos, ese dinero no cubre todos los gastos ni la necesidad extrema de alojamientos. El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano y las administraciones locales organizaron remisiones a centros colectivos pero los desplazados internos deben censarse primero y conseguir un certificado que demuestre su condición. Muchas gente no quiere hacerlo

por miedo al reclutamiento militar, porque carecen de documentación (como es el caso de la población romaní desplazada), por su incapacidad de pagar los impuestos o porque desconfían de un proceso censal arduo y opaco.

Puesto que el conflicto continúa, los desplazados internos ucranianos se enfrentan a tener que volver a desplazarse en un futuro. Aunque sería a todas luces beneficioso que el Gobierno pudiera asentar a la gente de forma permanente, hacerlo sería admitir públicamente que han perdido los territorios de los que proceden esos desplazados internos. Para asistir a la población desplazada, el Gobierno necesita ir más allá de las políticas, simplificar su enfoque, e introducir salvaguardas para proteger a los desplazados internos contra los desahucios forzados de esos centros colectivos rehabilitados.

Laura A Dean deanla12@gmail.com

Profesora adjunta de Ciencias Políticas y profesora de Estudios Globales Williams, Universidad de Millikin www.millikin.edu

1. Observatorio de Desplazamiento Interno (2016) *Ukraine: Translating IDPs' protection into legislative action* [Ucrania: traducir la protección de los desplazados internos en acciones legislativas] <http://bit.ly/IDMC-UkraineIDP-Protection>
2. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2015) <http://bit.ly/UNOCHA-Ukraine-displacement2015>
3. Zaharov B (2016) *Rights of the internally displaced persons* [Los derechos de las personas desplazadas internas], Unión Ucraniana de Helsinki para los Derechos Humanos <http://helsinki.org.ua/en/rights-of-the-internally-displaced-persons>

La reconstrucción del “hogar” en el norte de Uganda

Alice Anderson-Gough

Para entender la idea de alojamiento en situaciones de desplazamiento y de retorno, se deben considerar las dimensiones tanto materiales como no materiales. Además de emprender movimientos en entornos geográficos específicos, los desplazados internos y los repatriados se mueven en espacios sociales.

Durante el apogeo de la guerra entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor, cerca del 90 % de la población acholi fue desplazada y vivió en más de 150 campamentos forzados conocidos como “aldeas protegidas”, muchas dentro de un radio de 30 kilómetros de su casa. Como resultado, para erigir los alojamientos en los campamentos se utilizaron las mismas técnicas, materiales y estilos que se implementan en la construcción de los hogares de estas personas. Sin embargo, las limitaciones de espacio en los campamentos hicieron que las familias tuvieran que erigir sus casas muy cerca de otras. Dado que las viviendas de la población

acholi tradicionalmente se encuentran dispersas, tener que permanecer en tal proximidad se vivió como una violación de sus patrones de vida habituales. Un hecho que se relaciona con la falta de espacio fue que, debido al riesgo de incendio potencial que existía, en los campamentos no se permitían las chimeneas, uno de los elementos centrales y puntos de reunión de los hogares acholi. Además, el hecho de que el alojamiento no se hubiera construido en tierras ancestrales impedía que la vivienda fuera un “hogar verdadero”.

Después de las negociaciones de paz en 2006, se instruyó a la gente que “regresara a su